



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: EJECUTIVO LABORAL SUBSIGUIENTE
Radicado: 05001-31-05-014-2020-00339-01 (E2-22-115)
Demandante: JESÚS ALBERTO MACIAS LONDOÑO
Demandado: CONSORCIO C&M, conformado por CONEQUIPOS ING S.A.S. y MONTINPETROL S.A.S.
Procedencia: JUZGADO CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: AUTO INTERLOCUTORIO No.051 DEL 29 DE AGOSTO DE 2022
Asunto: INEXISTENCIA OBLIGACIÓN DE HACER – REINTEGRO

En Medellín, a los veintinueve (29) días del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), **la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar decisión de segundo grado al interior del proceso EJECUTIVO LABORAL SUBSIGUIENTE, conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-014-2020-00339-01 (E2-22-115), instaurado por **JESÚS ALBERTO MACIAS LONDOÑO** contra el **CONSORCIO C&M**, conformado por CONEQUIPOS ING S.A.S. y MONTINPETROL S.A.S., en punto a resolver el Recurso de Apelación impetrado por JESÚS ALBERTO MACIAS LONDOÑO, contra el auto que resolvió las excepciones incoadas contra el mandamiento de pago, proferido el 04 de abril de 2022 por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín.

1. ANTECEDENTES

El señor JESÚS ALBERTO MACIAS LONDOÑO, actuando por intermedio de apoderada judicial, promovió demanda ejecutiva laboral subsecuente al término del proceso ordinario, en contra del CONSORCIO C&M, conformado por CONEQUIPOS ING S.A.S. y MONTINPETROL S.A.S., con el fin de ser reintegrado al cargo que venía desempeñando, junto con el pago de los salarios, cesantías, intereses sobre las cesantías, primas de servicios, vacaciones, y aportes a la seguridad social causados desde el 01 de septiembre de 2017, con los intereses de mora correspondiente.

Como fundamento fáctico señaló que el 14 de septiembre de 2014 fue despedido por el CONSORCIO C&M, conformado por CONEQUIPOS ING S.A.S. y MONTINPETROL S.A.S.; que el

26 de febrero de 2015 el Juzgado Tercero Civil Municipal de Medellín tuteló en su favor el derecho a la estabilidad laboral reforzada por encontrarse en estado de debilidad manifiesta, ordenando transitoriamente su reintegro; que el 16 de abril del mismo año el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Medellín, confirmó la decisión de amparo transitorio. Anotó, de igual modo, que promovió demanda ordinaria laboral en contra del CONSORCIO C&M enderezada a obtener la convalidación del reintegro ordenado en sede de tutela; que el 01 de septiembre de 2017 el CONSORCIO C&M, decide de nuevo dar por terminado el contrato de trabajo, y que el 22 de enero de 2018 el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín acogió las pretensiones de la demanda, decisión que fue confirmada el 26 de octubre del mismo año por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín.

Aseveró que el CONSORCIO C&M, conformado por CONEQUIPOS ING S.A.S. y MONTINPETROL S.A.S., le adeuda los salarios, cesantías, intereses sobre las cesantías, primas de servicios, vacaciones, y aportes a la seguridad social causados desde el 01 de septiembre de 2017, siendo que nunca cumplió con la obligación de reintegrarlo al cargo que venía desempeñando, conceptos respecto de los cuales considera deben reconocerse intereses de mora.

1.1. Trámite de Primera Instancia

El 27 de julio de 2021 (doc.05, carp.01) el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, libró mandamiento de pago, en favor de JESÚS ALBERTO MACIAS LONDOÑO, y a cargo del CONSORCIO C&M, conformado por CONEQUIPOS ING S.A.S. y MONTINPETROL S.A.S., única y exclusivamente por la obligación de hacer consistente en *"... convalidar el reintegro ordenado por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Medellín y confirmado por el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Medellín, del señor JESUS ALBERTO MACIAS LONDOÑO al CONSORCIO C&M, conformado por MONTINPETROL S.A.S. e INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS - CONEQUIPOS ING S.A.S."*

CONEQUIPOS ING S.A.S. presentó contestación el 10 de septiembre de 2021 (doc.06, carp.01), misma en la que admitió que entre el CONSORCIO C&M, conformado por CONEQUIPOS ING S.A.S. y MONTINPETROL S.A.S., y el señor JESÚS ALBERTO MACIAS LONDOÑO existió una relación laboral entre el 19 de mayo de 2014 y el 19 de septiembre del mismo año, que el Juzgado Tercero Civil Municipal de Medellín, mediante fallo del 26 de febrero de 2015, ordenó de manera transitoria el reintegro demandante, decisión que fue confirmada el 16 de abril del mismo año por el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Medellín, y que el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia proferida el 22 de enero de 2018, convalidó el

reintegro ordenado en sede de tutela, decisión que fue confirmada el 26 de octubre del mismo año por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín.

Sostuvo que el reintegro del señor JESÚS ALBERTO MACIAS LONDOÑO se hizo efectivo el 30 de marzo de 2015, pero desde el 24 de junio de 2017 el demandante no volvió a reportar incapacidades, no se presentaba a laborar, y tampoco justificaba de ninguna manera su ausencia en el lugar de trabajo; que el actor fue requerido telefónicamente y por escrito para que rindiera los descargos y exculpaciones correspondientes que explicaran su conducta a la empresa y ejerciera su derecho de defensa, pero siempre se rehusó a brindarles cualquier tipo de información, razón por la cual, el 01 de septiembre de 2017, previo agotamiento del proceso disciplinario correspondiente, se dio por terminado el contrato de trabajo, invocando como justa causa la renuencia del trabajador para cumplir con sus deberes y obligaciones.

Adujo que las sentencias proferidas en sede constitucional y ordinaria están relacionadas con hechos y periodos específicos que no le otorgaban al demandante, de ninguna manera, la permisibilidad de que incumpliera “descaradamente” con sus obligaciones y deberes como trabajador y mucho menos le otorgaban a perpetuidad el reintegro y permanencia en la empresa, y que las obligaciones derivadas del proceso ordinario en el que se origina la presente ejecución se encuentran satisfechas en su integridad. De consiguiente, se opuso a al mandamiento de pago, excepcionando de mérito la inexistencia de la obligación, cumplimiento de la obligación, cobro de lo no debido, y buena fe.

MONTINPETROL S.A.S. contestó el 10 de septiembre de 2021 (doc.07, carp.01), escrito en el que admitió que el señor JESÚS ALBERTO MACIAS LONDOÑO fue despedido el 19 de septiembre de 2014 por el CONSORCIO C&M, conformado por CONEQUIPOS ING S.A.S. y MONTINPETROL S.A.S., que el Juzgado Tercero Civil Municipal de Medellín, mediante fallo del 26 de febrero de 2015, ordenó de manera transitoria el reintegro demandante, decisión que fue confirmada el 16 de abril del mismo año por el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Medellín, y que el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia proferida el 22 de enero de 2018, convalidó el reintegro ordenado en sede de tutela, decisión que fue confirmada el 26 de octubre del mismo año por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín.

Acotó que el señor JESÚS ALBERTO MACIAS LONDOÑO fue reintegrado el 30 de marzo de 2015, atendiendo el fallo proferido en la acción de tutela, reintegro que se mantuvo incólume hasta el 01 de septiembre de 2017, cuando se invocó como justa causa para terminar el contrato de trabajo el incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones dispuestas en el reglamento de trabajo que rige a la empresa, siendo que desde el 24 de junio de 2017 el demandante no

volvió a reportar incapacidades, no se presentaba a laborar, y tampoco justificaba de ninguna manera su ausencia en el lugar de trabajo. Precisó que el actor fue requerido telefónicamente y por escrito para que rindiera los descargos y exculpaciones con las que pudiera explicar a la empresa la motivación de su conducta y ejerciera su derecho de defensa, pero siempre se rehusó brindarles cualquier tipo de información.

Por último, señaló que las obligaciones derivadas del proceso ordinario en el que se origina la presente ejecución se encuentran satisfechas en su integridad, razón por la cual se opuso al mandamiento de pago excepcionando de fondo la inexistencia de la obligación, cumplimiento de la obligación, cobro de lo no debido, y buena fe.

1.2. Decisión de Primera Instancia

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 04 de abril de 2022 (doc.13-14, carp.01), por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, mediante proveído en el que se declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación propuesta por CONEQUIPOS ING S.A.S. y MONTINPETROL S.A., como integrantes del CONSORCIO C&M, y en el que no se impusieron costas procesales a cargo de ninguna de las partes.

Para sustentar su decisión, el cognoscente de primer grado argumentó que la sentencia proferida al interior del trámite ordinario, y que sirve como título ejecutivo, contiene, más que una obligación de hacer, la obligación de pagar los salarios, prestaciones y vacaciones causados entre la fecha del despido y la fecha del reintegro, toda vez que, en lo referido al reintegro, únicamente se convalidó lo ordenado en sede de tutela. También arguyó que el efecto derivado de la terminación del contrato de trabajo del actor el 19 de septiembre de 2014, estando cobijado por una estabilidad laboral reforzada en razón de su estado de salud, sin autorización del Ministerio de Trabajo, fue la ineficacia de ese despido en particular, sin que el proceso ejecutivo sea el escenario propicio para discutir situaciones acaecidas con posterioridad. Consecuentemente, indicó que las entidades ejecutadas en efecto cumplieron con la orden de reintegro, sin que las circunstancias de modo, tiempo y lugar acaecidas después de que se produjera el mismo, y referidas a la presunta existencia de una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo bajo un supuesto estado de debilidad manifiesta, puedan controvertirse por la vía ejecutiva, siendo que tal controversia sería propia de un proceso declarativo para determinar la legalidad y justeza de dicha terminación, máxime considerando que en la sentencia que sirve como título ejecutivo no se dispuso como obligación de hacer la existencia de una estabilidad laboral indefinida que proscribiera la terminación del contrato de trabajo por causas diferentes a las debatidas en dicha actuación procesal.

1.3. Recurso de Apelación

La decisión antes descrita fue objeto del recurso de alzada por el poderhabiente judicial del señor JESÚS ALBERTO MACIAS LONDOÑO (minuto 06:45, doc.14, carp.01), a propósito de que se revoque la decisión de primer grado, y en su lugar, se declaren no probadas las excepciones incoadas, y se ordene seguir adelante con la ejecución, relievando que no es necesario iniciar otro proceso declarativo con el fin de hacer valer las pruebas que conllevan a la ineficacia del despido que tuvo lugar 01 de septiembre de 2017, siendo que la sentencia que puso fin a la controversia, y que sirve de título para la presente ejecución, solo alcanzó firmeza el 26 de octubre de 2018, cuando se desató el recurso de alzada, por lo que, los hechos ocurridos con anterioridad, como lo fue el segundo despido, están cobijados por la orden de reintegro que aquella contiene.

1.4. Trámite de Segunda Instancia

El recurso de apelación se admitió el 18 de abril de 2022 (doc.02, carp.02), y mediante proveído del día 25 del mismo mes y año (doc.03, carp.02), se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, presentaran los alegatos de conclusión por escrito.

El poderhabiente judicial del señor JESÚS ALBERTO MACIAS LONDOÑO alegó el 29 de noviembre de 2022 (doc.04, carp.02), advirtiendo que no hubo ruptura del nexo causal entre la sentencia y el cumplimiento de la misma, que las sociedades demandadas tenían pleno conocimiento de la existencia de una sentencia judicial que no se encontraba en firme, porque se estaba a la espera de que se surtiera el recurso de alzada. Enfatizó que el hecho de que su prohijado no hubiera ido a trabajar no es razón suficiente para que se incumpliera con la sentencia, siendo que la misma no había alcanzado ejecutoria, que por la misma razón no se inició un proceso declarativo con ocasión del segundo despido, fecha para la cual se encontraba incapacitado, tal y como lo admitió en el interrogatorio de parte, y que la sentencia de segunda instancia, emitida al interior del trámite ordinario, no puede deshacerse acogiendo un presupuesto fáctico ocurrido con anterioridad a su emisión.

Por su parte, las apoderadas judiciales de CONEQUIPOS ING S.A.S. y MONTINPETROL S.A., como integrantes del CONSORCIO C&M, no presentaron alegatos de conclusión.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor JESÚS ALBERTO MACIAS LONDOÑO, advirtiéndose que, de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio de la providencia impugnada se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada.

2.1. Problema Jurídico

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a determinar si al CONSORCIO C&M, conformado por las sociedades CONEQUIPOS ING S.A.S. y MONTINPETROL S.A., le es exigible actualmente la obligación de reintegrar al señor JESÚS ALBERTO MACIAS LONDOÑO al cargo que venía desempeñando, con ocasión de las órdenes impartidas en la sentencia que puso fin al proceso ordinario en la que se origina la presente ejecución.

2.2. Sentido del Fallo

La Sala confirmará la decisión de primer grado, partiendo del presupuesto según el cual la obligación de hacer referida al reintegro ya fue cumplida, sin que los nuevos hechos ocurridos con posterioridad a los que fueron objeto del debate judicial inicial, puedan debatirse dentro de la presente ejecución, siendo que, como no fueron objeto de discusión al interior del trámite ordinario, sobre los mismos no existe la claridad, certeza ni exigibilidad que se exige de las obligaciones que prestan mérito ejecutivo.

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a zanjar la controversia planteada, la Sala advierte que no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos: que el señor JESÚS ALBERTO MACIAS LONDOÑO nació el 10 de noviembre de 1975 (pág.27, Expediente Ordinario), que el 19 de mayo de 2014 celebró contrato de trabajo por la duración de la obra o labor determinada con el CONSORCIO C&M, para desempeñar el cargo de oficial de obra civil en la reposición de tubería en los sectores de Bello PK6+277-PK6+661, Piedra Verde PK63+135-PK64+140, y Sinifana PK60+133-PK61+997 del Poliducto de Medellín – Cartago (pág.103, Expediente Ordinario); que el 07 de agosto de 2014 sufrió un accidente cuando al bajarse de un vehículo, caminó y se tropezó consigo mismo, cayendo al suelo y golpeándose la rodilla y mano derecha (pág.281 -286, Expediente Ordinario), y que fue despedido el 19 de septiembre de 2014 por no presentar oportunamente las incapacidades y/o justificación de su inasistencia al lugar de trabajo, invocándose como justa causa la violación grave de las obligaciones contractuales y reglamentarias (pág.316, Expediente Ordinario).

Tampoco se controvierte que el 26 de febrero de 2015 el Juzgado Tercero Civil Municipal de Medellín tuteló transitoriamente en favor del señor JESÚS ALBERTO MACIAS LONDOÑO, el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, ordenándole al CONSORCIO C&M reintegrarlo a sus labores, y advirtiéndole al accionante que la protección constitucional ordenada cesaría en caso de que no compareciera ante la jurisdicción ordinaria en el término improrrogable de cuatro meses (págs.327-358, Expediente Ordinario), decisión que fue confirmada el 16 de abril de 2015 por el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Medellín, y adicionada en el sentido de indicar que el reintegro debía hacerse efectivo en un cargo que ofreciera iguales o superiores condiciones al que venía desempeñando el actor cuando fue desvinculado, y que sea compatible con sus condiciones de salud y las recomendaciones médicas (págs.63-78, Expediente Ordinario).

En igual sentido obra constancia de que el señor JESÚS ALBERTO MACIAS LONDOÑO fue reintegrado por el CONSORCIO C&M a partir del 30 de marzo de 2015 (pag.105, Expediente Ordinario); que el 16 de agosto de 2017 fue citado a descargos por su empleador para que informara las razones por las cuales no se había presentado a trabajar desde el 24 de junio de

2017, sin reportar incapacidad, recomendaciones médicas, autorización de reincorporación, o soporte que acreditara su estado de salud actual (págs.07-10, doc.06, carp.01), que el 25 de agosto de 2017, y ante su inasistencia a la diligencia de descargos previamente programada, fue citado por segunda vez a descargos para que aportara las pruebas que justificaban porque no le había informado a la empresa cuál era su estado de salud (págs.11-13, doc.06, carp.01), y que el 01 de septiembre de 2017 fue despedido por no presentarse a trabajar desde el 25 de julio de 2017, invocando como justa causa el incumplimiento de las obligaciones laborales contraídas con la empresa (págs.14-15, doc.06, carp.01).

Así mismo, se encuentra acreditado que el 22 de enero de 2018 el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín **convalidó** el reintegro ordenado en sede de tutela, y condenó a las sociedades CONEQUIPOS ING S.A.S. y MONTINPETROL S.A., como integrantes del CONSORCIO C&M, al pago de la indemnización por despido discriminatorio, y de las cesantías, intereses sobre las cesantías, y primas de servicio causadas entre el despido y el reintegro, conceptos respecto de los que se autorizó compensar las sumas ya canceladas (págs.551-556, Expediente Ordinario), decisión que el 26 de octubre de 2018 fue confirmada en su integridad por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín (págs.565-566, Expediente Ordinario).

Finalmente, está probado que el 23 de septiembre de 2019 el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín libró mandamiento de pago por la suma de \$5.150.940 por el saldo insoluto de la indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, y por la suma de \$781.242 a título de costas de segunda instancia (págs.651-658, Expediente Ordinario), cifras que fueron canceladas mediante la constitución del título judicial 413230003477240 (págs.723,729-730 Expediente Ordinario), y con base en el cual, en la fecha 25 de febrero de 2020, se ordenó la terminación del proceso ejecutivo conocido con el radicado único nacional 05001-31-05-014-2019-00085-00 (págs.725-727, Expediente Ordinario).

2.3.1. El estado de debilidad manifiesta

El derecho al trabajo ha sido reconocido en nuestro ordenamiento jurídico como un valor esencial del Estado Social de Derecho, y es por ello que en el Preámbulo y los artículos 1º, 2º, 25, 39, 48, 55, 56 y 64 de la Constitución Política cuanta con una especial protección, traducido en la posibilidad de obtener un trabajo en condiciones dignas, no solo como un mecanismo para asegurar el mínimo vital y la calidad de vida digna, sino también como un requisito esencial para la concreción de la libertad, la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad.

El derecho a la estabilidad ocupacional reforzada, se funda en diversas disposiciones de la Constitución, a saber, en el derecho a “la estabilidad en el empleo” (CP art 53); el derecho de todas las personas que “se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta” a ser protegidas “especialmente” con miras a promover las condiciones que hagan posible una igualdad “real y efectiva” (CP art 13 y 93); el derecho al trabajo “en todas sus modalidades” tiene especial protección del Estado y debe estar rodeado de “condiciones dignas y justas” (CP art 25); el deber que tiene el Estado de adelantar una política de “integración social” a favor de aquellos que pueden considerarse “disminuidos físicos, sensoriales y síquicos”, o por mejor decir, en situación de discapacidad (CP art 47); en el derecho fundamental a gozar de un mínimo vital, entendido como la posibilidad efectiva de satisfacer necesidades humanas básicas como la alimentación, el vestido, el aseo, la vivienda, la educación y la salud (CP art 1, 53, 93 y 94); y el deber de todos de “obrar conforme al principio de solidaridad social” (CP art 1, 48 y 95), a propósito de asegurarle al trabajador certeza mínima de que su vínculo laboral no se fragmentará de forma abrupta y sorpresiva por una decisión arbitraria del empleador, de modo que, le garantice la permanencia en su empleo y limita la facultad unilateral del empleador de dar por terminado el contrato de trabajo, cuando dicha decisión está determinada por una situación de vulnerabilidad del trabajador.

Linealmente, la protección al derecho de la estabilidad laboral reforzada fue incorporada al ordenamiento jurídico por el legislador ordinario, mediante la expedición la Ley 361 de 1997, que impone a los empleadores el deber de solicitar autorización a la autoridad de trabajo para poder proceder a la terminación unilateral del contrato laboral; y de no agotarse éste trámite previo, en los términos indicados por la Corte Constitucional, se presumirá que la ruptura del vínculo obedece a motivos discriminatorios, presunción que (i) torna ineficaz el despido e (ii) impone la carga al dador del trabajo de pagar una indemnización de 180 días de salario más los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta la fecha en que el trabajador sea reintegrado (C-5531 de 2000, reiterada, entre otras, en las Sentencias T-331 de 2018, C-200 de 2019, T-524 de 2020, T-020 de 2021 – Subraya de la Sala).

Desde esta perspectiva, se educa que la garantía que protege al trabajador en situación de discapacidad en el colofón del vínculo laboral, tiene la finalidad de salvaguardar su estabilidad frente a comportamientos discriminatorios que tienen como propósito o efecto su exclusión del empleo, por lo que, atendiendo lo adocinado por la Sala de Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia, al trabajador le basta demostrar una significativa afectación en su estado de salud para beneficiarse de la presunción de discriminación, en tanto que el dador del trabajo tendrá el deber de acreditar en el juicio la ocurrencia de la justa causa, y de no hacerlo, el despido se reputará ineficaz y, en consecuencia, procederá el reintegro del trabajador junto con el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, más

la sanción de 180 días de salarios consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 (CSJ SL-1360 del 11-04-2018, Radicado 53394 – Subraya de la Sala).

Corolario de lo anterior, se colige que cuando el Juzgado Tercero Civil Municipal de Medellín tuteló en favor del señor JESÚS ALBERTO MACIAS LONDOÑO, el derecho el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, ordenándole al CONSORCIO C&M, conformado por las sociedades CONEQUIPOS ING S.A.S. y MONTINPETROL S.A., a reintegrarlo a sus labores (págs.327-358, Expediente Ordinario), decisión que no solo fue confirmada por el superior funcional, Juzgado Catorce Civil del Circuito de Medellín (págs.63-78, Expediente Ordinario), sino también acogidas por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín (págs.551-556, Expediente Ordinario), y por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín (págs.565-566, Expediente Ordinario), de lo que se sigue que jurídicamente única y exclusivamente tiene alcances en la ineficacia del despido que se produjo el 19 de septiembre de 2014 (pág.316, Expediente Ordinario).

2.3.2. El cumplimiento de la obligación de hacer referida al reintegro del trabajador

En glosa de lo antes dicho, y teniéndose por acreditado que el CONSORCIO C&M, conformado por las sociedades CONEQUIPOS ING S.A.S. y MONTINPETROL S.A., reintegró al señor JESÚS ALBERTO MACIAS LONDOÑO a partir del 30 de marzo de 2015 (pag.105, Expediente Ordinario), se colige, sin lugar a hesitación alguna que la obligación de hacer inicialmente contenida en el fallo de tutela, y posteriormente convalidada en la sentencia declarativa descritas en las líneas que anteceden, fue cumplida a cabalidad por las demandadas, sin que los nuevos hechos ocurridos con posterioridad a los que fueron objeto del debate judicial inicial, y relacionados con la presunta terminación de la relación de trabajo por el supuesto incumplimiento de las obligaciones laborales, puedan debatirse dentro de la presente ejecución, siendo que, como acertadamente lo indicó el a quo, tales hechos no fueron objeto de discusión al interior del trámite ordinario, y sobre los mismos no existe la claridad, certeza ni exigibilidad que se exige de las obligaciones que prestan mérito ejecutivo, en la medida en que las piezas procesales que conforman el título base de ejecución, esto es, los fallos de tutela y las sentencias declarativas, no ampararon una estabilidad laboral indefinida ni ordenaron el reintegro del trabajador respecto de despidos diferentes al objeto de controversia, que se circunscribe exclusivamente al que se produjo el 19 de septiembre de 2014.

Ahora bien, si en gracia de discusión se admitiere que la tutela al derecho a la estabilidad laboral reforzada decretado en favor del señor JESÚS ALBERTO MACIAS LONDOÑO, incluso lo amparaba respecto de futuros despidos, lo cierto es que, para activar la protección especial

prevista en la Ley 361 de 1997, y que proceda el reintegro del trabajador, es necesario: (i) que se establezca que el trabajador tiene un estado de salud que le impide o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en circunstancias regulares, pues no cualquier afectación resulta suficiente para considerarlo sujeto de especial protección constitucional; (ii) que se acredite que el estado de debilidad manifiesta fue conocido, o debió ser conocido por el empleador en un momento previo al despido, y finalmente, (iii) que no exista una justificación suficiente u objetiva para la desvinculación, de manera que sea claro que la misma tiene origen en una discriminación (CSJ SI-3772 del 05-09-2018, Radicado 52959, SL-4461 del 24-09-2019, Radicado 68039, SL-2957 del 03-08-2020, Radicado 71299, SL-4825 del 25-11-2020, Radicado 69370, SL-154 del 25-01-2021, Radicado 81847, SL-1665 del 20-04-2021, Radicado 83350), circunstancias que solo podrían acreditarse a través del trámite propio de los procesos declarativos, y respecto de las que conviene relieves, no obra prueba que acredite, por lo menos, que para el 01 de septiembre de 2017 el estado de salud del actor le impidiera o dificultara sustancialmente el desempeño de sus labores en circunstancias regulares, siendo que con la demanda de ejecución no se arrió ningún medio demostrativo.

Así las cosas, esta Sala de decisión no encuentra un camino diferente para transitar que el de impartir confirmación al proveído recurrido, y en el que se declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación.

3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 365 del CGP, las costas de la segunda instancia estarán a cargo del señor JESÚS ALBERTO MACIAS LONDOÑO por habersele resuelto desfavorablemente el recurso de apelación propuesto, y con arreglo a lo previsto en el Acuerdo PSAA 16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, se fijan como agencias en derecho, a favor de las sociedades CONEQUIPOS ING S.A.S. y MONTINPETROL S.A., integrantes del CONSORCIO C&M, la suma de \$1.000.000, que corresponde a un (1) SMMLV, en proporción de un 50% para cada una de las codemandadas.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

4. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto de resolución de excepciones proferido el 04 de abril de 2022 por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso EJECUTIVO LABORAL subsiguiente promovido por JESÚS ALBERTO MACIAS LONDOÑO en contra del CONSORCIO C&M, conformado por CONEQUIPOS ING S.A.S. y MONTINPETROL S.A.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia, a cargo de del señor JESÚS ALBERTO MACIAS LONDOÑO fijándose como agencias en derecho, en favor de las sociedades CONEQUIPOS ING S.A.S. y MONTINPETROL S.A., integrantes del CONSORCIO C&M, la suma de \$1.000.000, que corresponde a un (1) SMMLV, en proporción de un 50% para cada una de las codemandadas.

Lo resuelto se notifica en **ESTADOS**, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

Déjese copia de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, y **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.


VÍCTOR HUGO ORIUELA GUERRERO
Magistrado Ponente

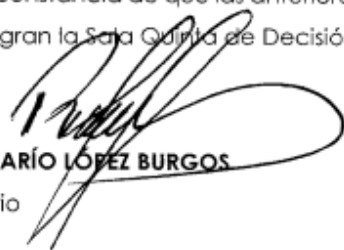

MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA
Magistrada


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

**LA SECRETARIA DE LA SALA LABORAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN CERTIFICA:**

Que esta providencia fue notificada en los
ESTADOS No.153 fijados en la secretaría del
Tribunal, hoy **30 de agosto de 2022** a las 08:00am,
los cuales pueden ser consultados en
["Publicación de Estados Electrónicos SL-TSM"](#)

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS
Secretario